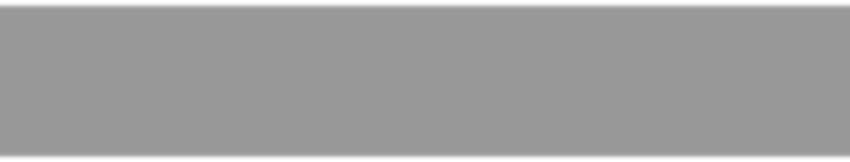
# SEPTIEMBRE 2022

Desde principios del siglo XXI todos los grandes centros de investigación (*Failed States, Freedom House, Human Rights Watch, International IDEA Global State of Democracy, , Polity IV, The Economist Intelligence Unit, Transparency International, V-Dem* como los principales) confirman un preocupante retroceso de la calidad democrática de los regímenes formalmente pluralistas, así como la generalización de sistemas híbridos, de tal suerte que la suma de éstos y de las autocracias abiertas representa cerca de los dos tercios de los Estados mundiales, a la vez que incluso las democracias plenas se resienten. Más en particular, se desequilibra la división horizontal de poderes en favor de Ejecutivos cada vez más incontrolados, se reduce la independencia judicial, se ponen trabas a los medios de comunicación críticos, no se combate eficazmente la corrupción, se recortan derechos y libertades y así sucesivamente.



¿Siguen siendo los Estados Unidos de América una democracia liberal?

Es especialmente inquietante que la primera potencia mundial, los Estados Unidos de América (EUA), tengan una democracia en retroceso pues, por ejemplo, para *The Economist Intelligence Unit* ya no son una democracia plena a tenor de los *rankings* anuales que utiliza para evaluar los procesos electorales y el pluralismo, la participación política, la cultura política, la efectividad de los derechos y libertades y el funcionamiento del gobierno. Los EUA han retrocedido en este último capítulo (obtienen 6.4 puntos sobre 10) y en cultura política (6.2 sobre 10). Por su parte, *Freedom House* utiliza criterios procedimentales sobre el funcionamiento democrático y la salud de los derechos y las libertades de los ciudadanos y sus observaciones, asimismo anuales, también confirman un serio y constante retroceso de los EUA: nada menos que once puntos en una década a causa de la discriminación de las minorías , el deterioro de las garantías de los derechos y las libertades, el poder irrestricto del dinero en la política y en las elecciones, reducidas a un mero ejercicio formal cada vez más manipulado, o la paralizante y peligrosa polarización . En este sentido, no es casual que la confianza social en el Gobierno haya pasado de un 77% en 1958 a un 19% en el 2015.

Aunque los progresistas puedan hacerse con la Presidencia (como ahora, con Joe Biden) e incluso el Congreso, la clave radica en la gran institución contramayoritaria que ha dejado

de actuar con sentido de Estado para optar mayoritariamente por una clara línea ideológica ultraconservadora, el Tribunal Supremo federal (TS).

Con los nombramientos de tres magistrados por parte de Donald Trump, la correlación de fuerzas en el TS es de seis magistrados ultraconservadores y sólo tres progresistas. Este TS tan escorado a la derecha ha iniciado una política judicial que no cesa de recortar derechos y libertades (el aborto, en particular), favorecer al *lobby* armamentístico, sintonizar con las confesiones religiosas más fundamentalistas (contra el movimiento LGTBIQ+, a favor del rezo obligatorio en las escuelas y de equiparar la doctrina ideológica del “diseño inteligente” divino con el darwinismo científico) y negar el calentamiento climático. Este TS- con el juez Clarence Thomas al frente como auténtico líder ultra- está impulsando una agresiva agenda judicial de carácter reaccionario que ya planea liquidar la *affirmative action* (la discriminación positiva para favorecer el ingreso de negros y otras minorías en las Universidades), anular el matrimonio homosexual o restringir al máximo los anticonceptivos, con lo que pretende imponer criterios ideológicos socialmente minoritarios por encima de las instituciones representativas elegidas por los ciudadanos.

La anulación de la histórica sentencia *Roe v. Wade* de 1973 ha supuesto un gravísimo retroceso en el derecho de las mujeres al aborto, ahora ya restringido o prácticamente liquidado en cerca de la mitad de los Estados. Es también enormemente preocupante, en una situación de innegable calentamiento climático, el recorte de competencias de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.

Desde el punto de vista electoral, el TS está avalando las maniobras de algunos Estados (gobernados por los Republicanos) para manipular las circunscripciones, dificultar el registro electoral de los ciudadanos y, en su caso, atribuir al Gobernador estatal la decisión final de avalar o no los resultados; todo ello en detrimento de cualquier eventual regulación federal democratizadora. En el caso *Moore v. Harper*, en Carolina del Norte, el TS estatal no admitió el fraudulento rediseño de las circunscripciones (la práctica del *gerrymandering*), pero el asunto se ha recurrido ante el TS federal y todo apunta que revertirá esa decisión. Con ello se legalizará del todo una descarada manipulación electoral que implica un auténtico fraude de la voluntad popular puesto que, al final, no contarán los ciudadanos, sino los territorios menos poblados donde esté concentrado el voto conservador. Aún más inconcebible resultaría admitir la propuesta de que el Gobernador estatal pueda no confirmar los resultados electorales, de ahí que si estos no son de su agrado podrían quedar anulados, una auténtica subversión del principio democrático. Si esta propuesta llega a aprobarse, dará igual que los Demócratas ganen en un Estado si el Gobernador es Republicano, aunque en teoría podría aplicarse también en sentido contrario, pero es muy improbable que los progresistas recurrieran a tal artificio antidemocrático. Los ultraconservadores apuestan por desincentivar la participación electoral y, sobre todo, por dificultar el registro de las minorías (proclives a los Demócratas) con farragosos trámites burocráticos, un paso más para devaluar la democracia.

Con ser todo esto muy grave, las decisiones negativas de mayor calado fueron las sentencias del TS que han liquidado prácticamente todas las limitaciones legislativas en la financiación de candidatos (*Citizens United v. Federal Election Comission*, de 2010) y de los partidos (*Mc Cutcheon v. Federal Election Comission*, de 2014). Con estas dos sentencias el TS permite a las corporaciones empresariales y financieras privadas gastar de manera ilimitada para promover a candidatos y ayudar a partidos. Si las corporaciones como tales

tienen derecho constitucional a sufragar sin límites eso es beneficiarlas artificialmente, por ello estas sentencias son un triunfo de la dominación de tales *lobbies* sobre la vida política. La política se convierte así en una disfuncional y tosca réplica del mercado económico en el que sólo los fuertes ganan, lo que implica una seria devaluación de la democracia. No puede ser más tramposo el argumento del TS para justificar tal liberalización financiera: la “libertad de expresión” que, a su juicio, se vería limitada si las corporaciones vieran restringidos sus gastos electorales. En realidad, la pluralidad se ve fuertemente limitada por el desequilibrio económico ya que los que menos tienen difícilmente van a poder competir políticamente. En suma, con estas sentencias se ha liquidado la capacidad del Congreso para intentar poner coto al poder que las grandes empresas y los principales grupos financieros tienen sobre la política, lo que degrada el funcionamiento real de la democracia.

Las encuestas del *Pew Research Center* confirman que los índices de polarización ideológica no cesan de aumentar en los EUA al crecer y mucho, de un lado, los ultraconservadores y retroceder los Republicanos moderados (una especie residual en extinción), y de otro, al radicalizarse el sector progresista de los Demócratas. El 92% de los Republicanos ha virado hacia posiciones muy a la derecha y el 94% de los Demócratas hacia la izquierda. El 36% de los Republicanos considera que el Partido Demócrata es un *peligro* para los EUA y el 27% de los Demócratas opina lo mismo de sus adversarios. En consecuencia, el 43% de los Republicanos es muy hostil a los Demócratas y el 38% de estos siente lo mismo con relación a aquellos. Por tanto, ha aumentado extraordinariamente en los EUA el índice de polarización, se han reforzado las tendencias al encapsulamiento, a los compartimentos estancos y a no interrelacionarse con los adversarios y el fenómeno se ha agravado en las redes sociales en las que predomina un exasperado clima de odio. A principios del siglo XXI un 63% de los Republicanos se consideraba conservador, hoy el 92%; del mismo modo, de un 49% de Demócratas progresistas se ha pasado a un 82%, con lo que los centristas “puros” son hoy una muy reducida minoría.



Getty Images disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55725586>

Lo más inquietante es el aumento de la violencia política protagonizada por milicias privadas de extrema derecha que han provocado numerosos incidentes y algunas víctimas: en este sentido, uno de los episodios más graves fue el intento de secuestro de Gretchen Whitmer, Gobernadora Demócrata de Michigan, amenazada de muerte por la ultraderecha más radical. Por supuesto, la herencia que ha dejado Trump ha sido desastrosa en este sentido pues socavó la transparencia del Gobierno al destituir a inspectores generales no de su agrado, intentó controlar la información, dio carta blanca e impunidad absoluta a la brutalidad policial, admitió arrestos injustificados de periodistas y minimizó el activismo subversivo ultraderechista.

La intolerancia de algunos movimientos anti vacunas y, sobre todo, la abominable insurrección golpista del 6 de enero de 2020 con el asalto al Capitolio fueron síntomas inequívocos del avance de las fuerzas antidemocráticas y de la ruptura de consensos básicos sobre el sistema político pluralista. No es que los EUA vivan un clima de preguerra civil en sentido estricto (este es un panorama descartable por la lealtad de las fuerzas armadas a la Constitución), pero podrían desembocar

en un escenario similar al que padeció Irlanda del Norte con los *troubles* (violencia terrorista sectaria bicomunitaria), lo que sería una catástrofe social.

En conclusión, sería fundamental inhabilitar a Trump e impedir que los Republicanos se hagan con el control de las dos cámaras en noviembre. Si los Demócratas revalidan su mayoría- algo que se antoja difícil-, deberían acabar con el requisito de la mayoría cualificada (60 votos) en el Senado para algunas leyes y si los EUA aspiran a ser tenidos por una genuina democracia liberal, son urgentes varias reformas: prohibir el *gerrymandering* (el diseño de las circunscripciones no puede quedar sólo en manos de los políticos), limitar a desorbitada influencia del dinero, simplificar los trámites administrativos para votar (no hay democracia sin voto no sometido a trabas) y crear una Agencia Electoral Federal al modo de la Junta Electoral Central española, por ejemplo. Por último, dada la composición tan sesgada y desequilibrada del actual TS y el carácter vitalicio de sus miembros, no sería descabellado considerar

ampliar el número de magistrados (Franklin D. Roosevelt estuvo tentado de hacerlo) ya que la Constitución no lo fija. Lo que no es positivo ni para el conjunto de los EUA ni para todo el mundo en general es que la primera potencia mundial

- que alardea de ser una democracia plena- haya retrocedido en todos los *rankings* y tenga hoy la consideración de una democracia parcial y defectuosa.

**Césareo Rodríguez Aguilera,**

Catedrático emérito de Ciencia Política

de la Universidad de Barcelona

***Referencias****:*

* The Economist: Índice de Democracia Global, anual (disponible en la red).
* Freedom House: *Freedom in the World*, encuestas anuales (disponibles en la red).
* International IDEA: *The Global state of Democracy*, 2021 (disponible en la red), 2021.
* E. Klein: *Por qué estamos polarizados*, Capitán Swing, Madrid, 2021.
* R. Kuttner: “¿Habrá democracia en los Estados Unidos el próximo 4 de julio?”, *Sin Permiso*, 23 de julio, 2022.
* Pew Research Center: *Political Polarization in the American Public. Political Polarization Survey Dataset*, junio 2014.
* A. Tusell Collado: “La calidad de la democracia y sus factores determinantes. Un análisis comparado de 60 países”, *Política y Sociedad*, 52 (1), 2015.

**Publicado por: Con el apoyo de:**



ANUE no hace necesariamente como suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores.